Detrás del cristal con que se mira: mujeres indígenas, órdenes normativos e interlegalidad

Pilar Uriona

La introducción del concepto de pluralismo no sólo en las formas de concebir los modos de organización económica, social, política, y cultural, sino también en los aspectos simbólicos y jurídicos que estructuran la vida cotidiana de las colectividades y grupos sociales pluriculturales que coexisten en Bolivia, apunta a ir un paso más allá del simple reconocimiento de la división dual que puede establecerse entre categorías como usos y costumbres y ley; escritura y oralidad; derecho ordinario y derecho indígena. Divisiones que reafirman una relación de poder entre los valores, principios y normas de una sociedad dominante y una sociedad dominada.

Recuperando la concepción de “interlegalidad” propuesta por Boaventura de Sousa Santos, la Coordinadora de la Mujer ha dado a conocer los resultados de un trabajo de diagnóstico de aproximación titulado “Detrás del cristal con que se mira: mujeres quechuas, aymaras, sirionó, trinitarias, chimane, chiquitanas y ayo-

reas, órdenes normativos e interlegalidad”.¹ Dicho diagnóstico ha sido realizado en cuatro departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni), en las comunidades aymaras de Chivo, Santiago de Llallagua, Cacachi, Sacasaca, Calamarca y la zona periurbana de Ventilla, las zonas quechuas de Puka Orko, Blanco Rancho, Antaqhawa y Guarayos, y los pueblos indígenas sirionó, trinitarios, chimane, chiquitanos y ayoreode, en las tierras bajas.

Estas siete investigaciones parten del supuesto de que existen “múltiples redes de juridicidad”, complejas, específicas y que se intersectan entre sí, influyéndose mutuamente. Las mismas han articulado las etapas del trabajo de campo a partir de cinco ejes específicos: identidad cultural e identidad de género; relaciones familiares y aspectos reproductivos; integridad personal y violencia de género; economía, manejo y control de recursos; y organización y participación política.

El primer eje puede ser visto como la transversal que cruza todos los demás y el aporte esencial del conjunto de investigaciones está en que no sólo privilegia la obtención de datos relacionados con quiénes imparten la justicia comunitaria (qué autoridades), cuáles son los procesos de conflicto y las transgresiones que se intentan resolver desde la misma y el tipo de sanciones establecidas, sino también enfatiza en la existencia de una configuración de relaciones de poder en base a la identidad de género configurada por valores, pautas sociales, principios regulativos y prescripciones de género que determinan cómo las mujeres interpretan desde su perspectiva dicha identidad, problematizando el ejercicio de sus derechos humanos, la autonomía y autodeterminación personal y los procesos de subordinación mediante la reafirmación de roles reproductivos y domésticos preestablecidos.

Los criterios que se utilizaron para seleccionar a los pueblos participantes tienen que ver con: el tipo de asentamiento y/o for-

1 “Detrás del cristal con que se mira: mujeres quechuas, aymaras, sirionó, trinitarias, chimane, chiquitanas y ayoreas, órdenes normativos e interlegalidad”. Nuevo Periodismo editores, con el auspicio de ASDI y la Embajada Real de Dinamarca (ERD).

ma de ocupación espacial; el sistema de producción y nivel de desarrollo tecnológico; la existencia y/o grado de estratificación social; la proximidad a los mercados y la vida urbana; y el tipo de organización política que existe en cada pueblo y comunidad indígena. Así, los pueblos chiquitanos y mojeño trinitarios pueden ser considerados como pueblos originalmente agricultores, cazadores, pescadores, sedentarios; los ayoreode, chimane y sirionó como pueblos de origen cazador, recolector, horticultor nómadas itinerantes; y las comunidades aymara y quechua como pueblos agricultores, campesinos, con conocimiento de tecnología de riego y amplia interrelación con el mercado.

La investigación se realizó abriendo espacios individuales y colectivos de análisis, reflexión y debate participativo en las comunidades y pueblos, con apoyo en la observación directa de las prácticas culturales y sociales desarrolladas en relación a los ejes de la investigación. Asimismo, se toman en cuenta la pertenencia generacional y el estado civil; lo socio-económico; el parentesco; la participación de las autoridades que resuelven los conflictos en general y los que involucran a las mujeres, autoridades familiares que aplican mecanismos de resolución de conflictos y actores del sistema de justicia ordinaria u otros mecanismos institucionales (defensorías, SLIMs).

Las principales técnicas de investigación utilizadas fueron las entrevistas individuales y colectivas semiestructuradas y en profundidad; la observación directa de prácticas sociales y procesos de resolución de conflictos y disputas; los testimonios e historias de vida; la revisión de cuadernos de registros, libros de actas y acuerdos de las autoridades, además de promover la realización de reuniones temáticas, talleres de reflexión y entrevistas grupales. Todo con el objeto de recuperar y visibilizar las percepciones de las mujeres respecto al ejercicio de sus derechos en tanto mujeres indígenas, originarias y campesinas, dentro de sus respectivos órdenes normativos y en situaciones de interlegalidad y de dar a conocer cómo las propias mujeres estructuran estrategias

de resistencia e interpelación a la forma de resolver los conflictos cuando perciben que las mismas no son justas para ellas o vulneran sus derechos.

Por tanto, el aspecto central al que apuntan las investigaciones tiene que ver con la necesidad de dar a conocer los distintos marcos normativos de las realidades culturales que se estudian y del modo en que las reivindicaciones de género y los derechos de las mujeres son abordados en ellos, así como de evidenciar que las asimetrías en razón de género en el ejercicio de la justicia pueden estar presentes en estos contextos culturales diversos y complejos, pero también son un componente presente en el sistema judicial occidental y ordinario. En el mismo, las demandas que presentan los distintos grupos étnicos pueden ser tratadas como demandas subalternizadas, en desigualdad de condiciones, ejerciéndose prácticas discriminatorias en razón de etnia, donde las mujeres se sitúan como sujetas sobre las que se ejerce una doble exclusión: por su pertenencia de género y por su pertenencia cultural.